

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



**JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICIPAL
Manizales, veintitrés (23) de abril de dos mil veintiuno (2021).**

SENTENCIA DE TUTELA No. 61

Procede el Juzgado a decidir la acción de tutela instaurada por la señora **VERÓNICA GUZMÁN ARIAS** en contra de la **FEDCO S.A.**, por la presunta vulneración a sus derechos fundamentales al debido proceso.

I. ANTECEDENTES

Refiere la accionante que el día 27 de enero de 2021 presentó derecho de petición dirigido a la empresa FEDCO, mediante el cual solicitó el pago de su liquidación.

Afirma que laboró con dicha empresa bajo un contrato laboral a término indefinido desde el 06 de octubre de 2018 hasta el 10 de diciembre de 2019 como asesora de tienda, donde devengaba el valor de \$828.816.

Aduce que el valor que se le adeuda por concepto de liquidación es \$2.052.328.

Que hasta la fecha de la presentación de la acción de tutela no le han dado respuesta a su petición y no han cancelado su liquidación.

II. PRETENSIONES

Solicita que se dé respuesta a su derecho de petición y en consecuencia se cancele su liquidación.

III. PRUEBAS

Aportadas por la accionante: copia del derecho de petición y copia de cedula de ciudadanía.

Aportadas por la entidad **FEDCO S.A.**: Con la respuesta a la acción tuitiva, se adjuntó Copia del recibo de pago de la liquidación por un valor de \$\$2.052.328 del Banco Popular, copia de respuesta a derecho de petición, copia de envío y recibió del derecho de petición.

IV. TRÁMITE

Mediante auto fechado 14 de abril de 2021, se admitió la acción de tutela, se decretaron las pruebas presentadas por la parte demandante y se dispuso la notificación a la entidad accionada, para que se sirva dar respuesta al escrito de tutela, dentro del término de (2) días hábiles y solicitara las pruebas que pretenda hacer valen para su defensa.

V. PRONUNCIAMIENTO DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS.

La entidad accionada, **FEDCO S.A** manifestó que en la presente acción de tutela existe el derecho superado, en tanto ya se dio respuesta al derecho de petición elevado por la actora en fecha del 15 de abril de 2021 ya se procedió al pago de su liquidación correspondiente al monto de \$2.052.328, para lo cual anexan comprobante de pago y comprobante de envío y recibo de la respuesta por parte de la accionante.

VI. PROBLEMA JURÍDICO.

Una vez desplegados los anteriores supuestos fácticos, se procederá a determinar si efectivamente se vulneró el derecho fundamental constitucional a la petición al accionante por parte de la entidad accionada, al no proceder a pago de la pensión por no poseer el documento de identidad original.

En esas condiciones se encuentra el expediente a despacho, y procede esta Funcionaria Judicial a resolver lo pertinente, de conformidad con las siguientes:

VII. CONSIDERACIONES

DEL DERECHO DE PETICIÓN

Debiendo analizar desde el punto de vista constitucional y legal, y acudiendo al criterio de interpretación sistemático (que busca el enlace de todas las instituciones y reglas jurídicas dentro de una magna unidad); cual ha sido el trato dado al DERECHO DE PETICIÓN. Miremos:

Respecto al derecho de petición, la Constitución Política de Colombia lo consagra como un derecho fundamental, derecho instituido en el artículo 23, que reza:

“...Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.”

Dicho derecho igualmente se encuentra desarrollado por precisos mandatos legales, es así como la Ley 1755 del 30 de junio de 2015, que sustituye el Título II del derecho de petición, Capítulo I y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo artículos 13 al 33), desarrolla en forma armónica dicho derecho; consagrando las diversas clases de peticiones que pueden ser ejercidas, la forma de su presentación, los asuntos que pueden comprender, el trámite que debe observarse, los términos para dar respuesta, la forma de notificación de las decisiones, los efectos de las mismas y la responsabilidad por la desatención al derecho ejercitado.

Acerca del carácter fundamental de este derecho, tenemos que la Corte Constitucional en numerosas oportunidades, se ha pronunciado de manera positiva en cuanto al derecho de petición como uno de aquellos derechos que por sus connotaciones y repercusiones, debe

ser catalogado y tratado como fundamental, por ende, amparable bajo la figura de la acción de tutela.

El máximo tribunal de lo constitucional, ha establecido el conjunto de características de la respuesta al derecho de petición, identificando la oportunidad, la pertinencia de la respuesta, y la comunicación de la misma al petente, como dispositivos inherentes y esenciales a éste. Es así como sintetizó las propiedades de este derecho en sentencia T-377 de 2000 de la siguiente manera:

“...4. En relación con el derecho de petición, la amplia jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido estos parámetros:

a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión.

b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.

c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en conocimiento del peticionario. Sino se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.

d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita.

e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando la ley así lo determine (...).”

Teniendo como punto de partida la anterior definición, lo consagrado por la Constitución Política y las diversas clases de peticiones contenidas en la Ley 1755 de 2015, se hace necesario determinar qué clase de petición es la presentada en este asunto; para el efecto vale la pena traer a colación la norma ya referida, la cual establece en su artículo 32 que:

“...Artículo 32. Derecho de petición ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. Toda persona podrá ejercer el derecho de petición para garantizar sus derechos fundamentales ante organizaciones privadas con o sin personería jurídica, tales como sociedades, corporaciones, fundaciones, asociaciones, organizaciones religiosas, cooperativas, instituciones financieras o clubes.

Las organizaciones privadas solo podrán invocar la reserva de la información solicitada en los casos expresamente establecidos en la Constitución Política y la ley.

Las peticiones ante las empresas o personas que administran archivos y bases de datos de carácter financiero, crediticio, comercial, de servicios y las provenientes de terceros países se regirán por lo dispuesto en la Ley Estatutaria del Hábeas Data.

PARÁGRAFO 1o. *Este derecho también podrá ejercerse ante personas naturales cuando frente a ellas el solicitante se encuentre en situaciones de indefensión, subordinación o la persona natural se encuentre ejerciendo una función o posición dominante frente al peticionario.*

PARÁGRAFO 2o. *Los personeros municipales y distritales y la Defensoría del Pueblo prestarán asistencia eficaz e inmediata a toda persona que la solicite, para garantizarle el ejercicio del derecho constitucional de petición que hubiere ejercido o desee ejercer ante organizaciones o instituciones privadas.*

PARÁGRAFO 3o. *Ninguna entidad privada podrá negarse a la recepción y radicación de solicitudes y peticiones respetuosas, so pena de incurrir en sanciones y/o multas por parte de las autoridades competentes”.*

CARENCIA ACTUAL DE OBJETO.

La protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales vulnerados o amenazados, por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, constituye el fundamento objetivo del artículo 86 de la Constitución Política Nacional.

Este amparo conlleva a la impartición de una orden de inmediato cumplimiento, siendo este el mecanismo efectivo, cuando realmente sea necesario para superar el quebrantamiento de los derechos fundamentales.

De existir otro medio de defensa judicial, como puede ser la jurisdicción ordinaria, este impide la activación del amparo constitucional, mediante la acción de tutela, por ser este un mecanismo subsidiario y residual el cual no puede suplantarse los instrumentos judiciales previstos para cada especialidad, sin embargo de manera excepcional pueda actuar este mecanismo con la condición de ser transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

En ese orden, cuando el accionado desarrolla los actos necesarios para deshacer el agravio, es decir, observa y satisface las pretensiones del accionante mediante la actividad tendida, arriba a lo que la teoría constitucional ha denominado la carencia actual del objeto, por ser innecesario el pronunciamiento del juez a los planteamientos de fondo del escrito de tutela.

En este sentido la Corte se ha pronunciado indicando: *"ante la ausencia de supuestos fácticos, la decisión que pudiese tomar el juez en el caso concreto para resolver la pretensión se convertiría en ineficaz"*¹.

Las pretensiones satisfechas carecen de sentido dentro de la acción de tutela ya que:

*"(...) pierde su razón de ser cuando durante el trámite de/proceso, la situación que genera la amenaza o vulneración de los derechos, fundamentales invocados es superada o finalmente produce el daño que se pretendía evitar con la solicitud de amparo"*², en otras palabras, si: *"previamente al pronunciamiento de/juez de tutela, sucede lo requerido, es claro que se está*

¹T-011 de 2016.

²T-970 de 2014.

frente a un hecho superado, porque desaparece la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales”³.

Sobre el particular, la Sentencia T- 154 de 2017, donde actuó como Magistrada Ponente la Doctora María Victoria Calle Correa, dispone:

“De conformidad con el Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia constitucional, la carencia actual de objeto se presenta en tres hipótesis: (i) cuando existe un hecho superado, (ii) cuando se presenta daño consumado, o (iii) cuando se está ante un hecho sobreviniente

*En lo que respecta a la carencia actual de objeto por hecho superado, la jurisprudencia constitucional, ha sostenido que esta **se presenta cuando entre la interposición de la acción de tutela y el fallo de la misma, se satisface por completo la pretensión contenida en la demanda, es decir, que por razones ajenas a la intervención del juez constitucional, desaparece la causa que originó la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del peticionario.**” (Negrillas Propias.)*

A su turno, la Sentencia T – 013 de 2017, donde actuó como Magistrado Ponente el Doctor Alberto Rojas Ríos, indicó que:

*“No obstante, cuando la situación de hecho que causa la supuesta amenaza o vulneración del derecho alegado desaparece o se encuentra superada, la acción de tutela pierde toda razón de ser como mecanismo más apropiado y expedito de protección judicial. (...) **En ese orden, si la acción de tutela busca es ordenar a una autoridad pública o un particular que actúe o deje de hacerlo, y previamente al pronunciamiento del juez de tutela, sucede lo requerido, es claro que se está frente a un hecho superado, porque desaparece la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales,** en otras palabras, ya no existirían circunstancias reales que materialicen la decisión del juez de tutela.” (Negrillas propias.)*

I. CASO CONCRETO

La parte actora interpone este mecanismo sumarial, con el fin de que se proteja su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la accionada, al no responder su petición y no cancelar el valor por concepto de liquidación.

La acción de tutela fue admitida y notificada a la entidad **FEDCO S.A** quien se pronunció frente al mecanismo constitucional impetrado indicando que existía hecho superado en tanto ya dio respuesta a la petición y así mismo ya cancelo el valor por concepto de liquidación a la accionante.

CONCLUSIÓN

Una vez observado lo obrante en el cartulario, de donde se desprende que efectivamente la accionada ha cumplido con la carga que le correspondía de dar contestación al derecho de petición y así mismo, cancelar el valor de la liquidación de la señora GUZMÁN ARIAS por el valor de \$2.052.328, aportando la constancia de consignación en el Banco Popular y constancia del envío y recibo por parte de la accionante de la petición de fecha 15 de abril de 2021 al correo electrónico reportado por ella, no le queda otra cosa a esta Juez

³T-168 de 2008.

Constitucional que determinar que si bien es cierto existió una controversia que generó la reclamación por vía de acción de tutela, actualmente ha dejado de existir ante la respuesta al derecho de petición y pago de la liquidación a la que tiene derecho por parte de la accionada a la accionante; por lo que a este punto de la tutela resulta inútil e irrazonable ahondar más sobre el asunto, estando en tal sentido en el caso objeto en estudio, frente a una carencia actual de objeto por “Hecho Superado” y en consecuencia la acción de tutela impetrada carecería de eficacia y razón de ser, accediéndose a la petición entablada por la parte accionada.

Por consiguiente, al desaparecer los motivos por los cuales se interpuso la presente acción, resulta inocuo realizar cualquier tipo de consideración sobre lo pretendido, presentándose sobre esta acción tuitiva el fenómeno de la **CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO**, pues durante el transcurso de la acción de tutela desaparecieron los motivos que dieron origen a la solicitud de amparo, siendo innecesario que se formulen observaciones especiales sobre la materia o que se profiera una orden puntual de protección⁴.

Por lo dicho, el Juzgado Sexto Civil de Manizales, Caldas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley:

RESUELVE

PRIMERO: DECLARA que sobre la presente acción de tutela instaurada por **VERÓNICA GUZMÁN ARIAS** en contra de la **FEDCO S.A.**, ha operado la **CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO**.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito a las partes, informándoles en tal acto que pueden impugnar esta decisión dentro de los tres días siguientes a su notificación.

TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, se ordena remitir el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


VALENTINA SANZ MEJÍA
JUEZ

⁴ Sentencia T 059 de 2016 MP Luis Guillermo Guerrero Pérez.

Firmado Por:

VALENTINA SANZ MEJIA

JUEZ

JUEZ - JUZGADO 006 MUNICIPAL CIVIL DE LA CIUDAD DE MANIZALES-CALDAS

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **5fe34c2cad3b7e776521bfe25d3a7fa8caa37556b13d77ec5cbf569b8cffd9a8**

Documento generado en 23/04/2021 03:41:11 PM